

AGENDA CIUDADANA

¿UNA PRESIDENCIA UNIDIMENSIONAL?

Lorenzo Meyer

Simplificar lo Complejo.- La popularidad del presidente, según las encuestas, es mayor que nunca (6.7 sobre diez, de acuerdo con Reforma del 1º de diciembre). Sin embargo, lo anterior no elimina el hecho de que hay problemas serios en el estilo de gobernar de Ernesto Zedillo y que afectan a la vida colectiva, a la esencia misma de la solidaridad social.

El buen político no es especialista sino justamente lo contrario: generalista. Y la razón de ello es que la médula de su actividad -- el poder -- es omnímodo, abarca todo o, al menos, lo intenta. Cuando la máxima responsabilidad en el ejercicio de ese poder queda en manos de un especialista que actúa como tal, entonces se corre el peligro de forzar a la política a ser unidimensional, lo que es contrario a su naturaleza.

La presidencia, pese a los cambios que ha sufrido, sigue siendo el componente central de la estructura de poder mexicana. Ahora bien, bajo Zedillo, esa presidencia ha privilegiado en exceso una dimensión de su quehacer y ha concentrado el grueso de su energía en tratar de manejar sólo una de las muchas variables que conforman el fenómeno político: la economía. Al hacerlo, la institución ha dejado que un buen número de los hilos que componen la compleja trama de la vida pública mexicana, queden sueltos o, lo que es peor, que sean manipulados por actores que tienen objetivos contrarios al interés de la mayoría.

Si se define dimensión como la extensión de un objeto en una dirección determinada, no hay duda que la que la actual presidencia ha sobreprivilegiado la dimensión política de la economía al punto de, en los hechos, equipararla o confundirla

con la política misma, quizá, entre otras cosas, porque esa es la única área de la vida social en la que el actual presidente tiene experiencia. Hasta antes de 1994, y con la excepción de su breve paso por la Secretaría de Educación, Zedillo fue única y exclusivamente, economista, es decir, hombre de una sola ocupación y forma de vida. En realidad, la experiencia del actual presidente ni siquiera abarca a la dimensión económica en su totalidad, sino que se ha concentrado en la zona de las grandes variables, en la de la macroeconomía.

La unidimensionalidad del jefe del Poder Ejecutivo quizá fue funcional al inicio del actual gobierno, cuando las debilidades del esquema económico que heredó del sexenio anterior, combinadas con la torpeza del primer secretario de Hacienda, hicieron caer de nuevo y de manera espectacular, los indicadores la actividad productiva. En efecto, en un sólo año, en 1995, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó en 7%, y el más alto nivel de la dirección política del país debió vivir en una atmósfera equivalente a la de un estado de guerra, donde todas las consideraciones debieron subordinarse a una sola meta: la de sobrevivir y vencer al enemigo, en este caso, a la crisis económica. Es claro que entonces la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB se convirtió en el centro mismo de la agenda nacional, pues sin encausar a la actividad productiva por el camino del crecimiento, el resto de los asuntos públicos se agravarían. Sin embargo, no es posible vivir siempre en la emergencia. A precios constantes, el PIB de 1997 ya es superior al de 1994 en casi un cinco por ciento, y por tanto la atención presidencial debió de haber recobrado ya el equilibrio, es decir, el sentido de la complejidad que la responsabilidad del puesto implica y la coyuntura histórica demanda, pero no pareciera que ese ha sido el caso.

La Agenda Nacional es Pluridimensional.- La lista de prioridades del mexicano promedio no cuadra con la concentración de la atención presidencial en el área macroeconómica. En la reunión del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico (APEC) que acaba de celebrarse en Vancouver, el presidente, según la prensa, centró la atención de los participantes al convertir su intervención en una lección a los jefes de Estado de Japón y de los otros países asiáticos sobre la forma adecuada de afrontar las crisis que hoy ponen en peligro la estabilidad de sus monedas y afectan negativamente su crecimiento (Reforma, 27 de noviembre). No está del todo mal bajarle los humos a los “tigres” y a Japón, sin embargo, juzgado no desde la cumbre canadiense, sino desde el interior del país, la perspectiva sobre el desempeño presidencial cambia.

Para empezar, está el otro lado de la moneda económica misma: la economía del hogar mexicano promedio, cuyo destino pareciera haberse dejado simplemente al paso del tiempo y a la voluntad del mercado. Este año, el PIB per cápita siguió siendo nueve por ciento inferior al de 1994, pues de 4, 682 dólares que era entonces, cayó a 3, 138 en 1995 y se calcula que en 1997 no rebasará los 4, 257 dólares corrientes (Reforma, 26 de noviembre). Pero si en promedio los mexicanos siguen siendo un poco más pobres de lo que eran hace tres años, resulta que la desigualdad en la distribución de ese ingreso individual ha seguido avanzando. Así, y dentro de la lógica del mercado, mientras unos pocos han prosperando dentro de la crisis -- en particular las grandes empresas ligadas a la globalización y con buenas conexiones políticas --, muchos más han continuado un descenso de su nivel de vida que amenaza con enviarlos o ya los ha enviado a la marginalidad; los que ya estaban en ella desde antes, simplemente han perdido la posibilidad de superarla.

Según las cifras disponibles en el Banco Interamericano de desarrollo, los países del continente donde hubo un mayor aumento de la pobreza en los últimos diez años fueron México y Bahamas (datos presentados por Juan Luis Longoño, Reforma, 9 de mayo). Si el poder de compra real del salario mínimo en 1994 era cien, para 1997 es de apenas 63, y resulta que el 46.3% de la población económicamente activa recibe, cuando mucho, el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, 50 pesos o alrededor de seis dólares diarios; únicamente el 12% de la fuerza de trabajo tienen ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos o más, es decir, a 125 pesos o 15 dólares diarios o más (Expansión, No. 728, noviembre 5, 1997).

A un buen número de mexicanos las buenas nuevas sobre el comportamiento de las exportaciones no les compensa las malas nuevas sobre su seguridad personal. La semana pasada, por ejemplo, se llevaron a cabo manifestaciones en la Ciudad de México, Tijuana, Puebla y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reclamar al Poder Ejecutivo la desatención, o algo peor, en materia de seguridad pública. Se trató de manifestaciones desde los extremos de la sociedad mexicana. En el Distrito Federal, los marchistas fueron, básicamente, clase media, cansada y desesperada de sentirse -- y ser -- víctima de una actividad criminal que invade prácticamente todos los ámbitos de la ciudad, que además lo hace con impunidad total, algunas veces con una violencia sádica y en complicidad con una policía corrupta. En contraste, en Chiapas, los manifestantes fueron los pobres de entre los pobres, miembros de las comunidades indígenas víctimas desde hace tiempo de la agresión sistemática de grupos paramilitares que se mueven con absoluta impunidad en una región supuestamente saturada por el ejército y por las varias policías locales y federales que ocuparon el estado tras la rebelión zapatista de 1994. Como candidato, Ernesto Zedillo se

comprometió a dar respuesta al problema planteado por la insurrección indígena de Chiapas, no mediante la violencia sino por la vía de la negociación y la atención a un reclamo centenario de justicia. Como presidente, su política no corresponde a la que originalmente anunció; hoy su objetivo pareciera ser el posponer indefinidamente la salida negociada, desentenderse del problema y dejar su solución en manos de los viejos intereses locales y al correr del tiempo. En la práctica, eso significa alentar o tolerar la violencia no legítima, hacer imposible la vida de suyo difícil en los pueblos que tienen simpatías por el movimiento rebelde, desplazándolos por la vía del terror de sus lugares de residencia -- como esta ocurriendo en Chenalhó --, y convertir a sus habitantes de extremadamente pobres en pobres absolutos para colocarlos en la disyuntiva de rendirse o desaparecer por asesinato, hambre o enfermedad, y esto no es exageración sino estricta descripción de la realidad (véanse al respecto las crónicas de Hermann Bellinghausen y otros testimonios sobre el tema aparecidos en La Jornada de fines de noviembre). El jefe de gobierno que da lecciones de macroeconomía en Vancouver a sus iguales ¿que lección puede dar a los indígenas chiapanecos y al resto de los mexicanos?

La Justicia.- recién llegado a Los Pinos, el 5 de diciembre de 1994, el presidente Zedillo envió al Congreso una iniciativa para reformar, fortaleciéndolo, al Poder Judicial. Ese mismo mes la iniciativa era ley. Por otra parte, la Procuraduría General de la República le fue entregada nada menos que a un prominente miembro de la oposición. Tan espectacular principio hizo suponer una verdadera reforma a una de las áreas institucionales más desprestigiadas del país: la de la justicia. Sin embargo, la energía presidencial inicial se perdió muy pronto, y hoy la PGR sigue siendo lo que siempre ha sido y la justicia sigue impartándose de manera muy

diferente para el que tiene dinero y para el que no lo tiene. El grueso de los mexicanos víctimas del crimen ni siquiera consideran la posibilidad de buscar apoyo en los órganos formales de justicia, pues en el mejor de los casos es inútil y en el peor, puede resultar contraproducente.

Si ya no por razones éticas y de sentido de la responsabilidad política, al menos por razones prácticas -- económicas --, es necesario sacar a la procuración de justicia del pantano en que se encuentra. En efecto, ya está muy claro que un factor que hace atractivo un “mercado emergente” como es el mexicano al gran capital externo, es el hecho de que éste cuente con un marco jurídico que tenga y sostenga reglas claras sobre lo que es legal y lo que no lo es. El famoso “Estado de Derecho” es un componente indispensable para crear el clima de confianza del que el futurólogo Francis Fukuyama hace depender el éxito o fracaso de las economías nacionales en el siglo XXI.

El Peligro.- El gran mérito político del presidente, y quizá la fuente de su popularidad en las encuestas, es no ser Carlos Salinas o ninguno de los dinosaurios políticos que aún gobiernan los estados del sur del país. Es verdad que en vísperas de las elecciones de 1997 Ernesto Zedillo abandonó la “sana distancia” respecto de su partido que había prometido en 1994 y se convirtió en un activo militante del PRI, pero también es verdad que no intentó neutralizar por las vías tradicionales los avances de la oposición en el Congreso ni en los gobiernos locales. Sin embargo, ese cierto *laisse faire* político-electoral de la presidencia no es suficiente para llevar a buen puerto el cambio político mexicano.

El ala dura del viejo régimen se niega a aceptar la muerte de éste, y de hecho ya inició la contraofensiva: el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, ya se ha

propuesto a sus correligionarios como el líder del “no pasarán” frente a las fuerzas del cambio (La Jornada, 1º de diciembre). Si la presidencia no actúa como fuerza neutralizadora de la reacción de los “halcones” políticos que le rodean, el corazón mismo del proceso de modernización, que es político y no económico, se verá afectado negativamente, y el delicado proceso de transición podría convertirse en algo caótico y absolutamente disfuncional para el proyecto globalizador de Zedillo.

En suma, la política es multidimensional y así debe practicarla el órgano político por excelencia en México: la presidencia. Que el secretario de Hacienda y todo su aparato sean economista las 24 horas del día, pero el presidente no puede darse ese lujo si quiere estar a la altura de su responsabilidad histórica.